

Santiago, cinco de julio de dos mil veinticuatro.

**Vistos:**

Por sentencia de veinte de julio de dos mil veintitrés, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos RIT O-1412-2023, se resolvió rechazar la excepción de finiquito opuesta por la demandada; acoger la demanda, declarando que el despido de 3 de febrero de 2023 es injustificado; y condenar a la demandada a la diferencia de lo ya pagado por indemnización sustitutiva del aviso previo; diferencia de lo ya pagado por indemnización por años de servicio, incremento legal del 30%; diferencia de lo ya pagado por feriado proporcional, y la restitución del descuento del aporte patronal de AFC, por los montos y periodos que detalla el fallo, más reajustes e intereses legales, sin constas.

Contra este fallo, la demandada interpone recurso de nulidad, e invoca como primera causal aquella contemplada en el artículo 478 letra B) del Código del Trabajo, esto es, por estimar que la sentencia ha sido dictada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. En subsidio, invoca la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, por estimar que se ha dictado sentencia con infracción de ley que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en relación con los artículos 13 y 52 de la Ley N° 19.728.

Declarado admisible el recurso se procedió a su vista, oportunidad en que alegaron los abogados de las partes.

**Considerando:**

**Primero:** Que, la parte demandada invoca como causal aquella contenida en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, toda vez que, a su juicio, el único motivo que lleva al tribunal a considerar que el despido de autos es injustificado se expresa en el considerando octavo, y consistiría en que la carta de despido es imprecisa y no cumple con los requisitos legales. Alega que esto deja en evidencia que el sentenciador no analizó la prueba rendida por la demandada, tendiente a demostrar la reorganización de la empresa.

Estima que se ha infringido el principio lógico de la razón suficiente, pues no se consideraron todos los documentos ofrecidos por la demandada como medios de prueba para acreditar la causal de despido



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VRGWXXSXMP

invocada. Por tanto, no existiría vinculación racional en las proposiciones de la sentencia.

Los mismos problemas se producen, según plantea, al acoger el tribunal las acciones de cobro de prestaciones, sin considerar las liquidaciones de sueldo aportadas por la demandada, las que demostrarían que no existen diferencias en el pago de las indemnizaciones por término del despido.

En otro orden de ideas, y de manera subsidiarias a las alegaciones ya expuestas, alega que se vulnera la sana crítica al ser rechazada la excepción de finiquito opuesta, especialmente porque del instrumento aportado como prueba, se puede observar que, si bien el demandante hizo reserva de acciones, no consta que comprendieran diferencia alguna por los conceptos que reclama el actor.

Estima que esto infringe el principio de no contradicción, pues se tuvo a la vista un finiquito en que se hace reserva específica de acciones de algunas cosas, pero no sobre diferencias de indemnización u otros conceptos que posteriormente se reclamaron, pero igualmente el sentenciador condenó al pago de ciertas diferencias de conceptos ya pagados. También se infringe el principio lógico de la razón suficiente en razón de no ser considerado el finiquito suscrito por las partes como medio idóneo para comprobar la renuncia hecha por el trabajador, al momento de establecer una renuncia de acciones específica.

Solicita, en concreto, que se anule el fallo impugnado y se dicte sentencia de reemplazo que rechace la demanda en todas sus partes o, en subsidio, acoja la excepción de finiquito opuesta.

**Segundo:** Que, en subsidio, la parte demandada alude como segunda causal aquella contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo, toda vez que, a su juicio, existe infracción a los artículos 13 y 52 de la Ley N° 19.728 por lo razonado en el considerando noveno del fallo y el hecho de que se haya condenado a la empresa al pago de la devolución del descuento realizado por el empleador a título de aporte patronal al seguro de cesantía. Estima que, de las normas citadas, cuando se pone término al contrato de trabajo por la causal de necesidades de la empresa, no es impedimento para efectuar el descuento en cuestión que el despido haya sido declarado injustificado o no.



Solicita, en consecuencia, que se anule el fallo impugnado en relación a la condena de devolución del aporte patronal al seguro de cesantía, y se dicte sentencia de reemplazo que rechace la demanda en aquel extremo.

**Tercero:** Que el recurso de nulidad laboral tiene por objeto, según sea la causal invocada, asegurar el respeto a las garantías y derechos fundamentales, o bien, conseguir sentencias ajustadas a la ley, como se desprende de los artículos 477 y 478 del Código del Trabajo, todo lo cual evidencia su carácter extraordinario que se manifiesta por la excepcionalidad de los presupuestos que configuran cada una de las referidas causales en atención al fin perseguido por ellas, situación que igualmente determina un ámbito restringido de revisión por parte de los tribunales superiores y que, como contrapartida, impone al recurrente la obligación de precisar con rigurosidad los fundamentos de aquellas que invoca, como, asimismo, de las peticiones que efectúa.

Igualmente, cabe tener presente que el recurso de nulidad no constituye una instancia, de manera que estos sentenciadores no pueden ni deben revisar los hechos que conforman el conflicto jurídico de que se trata, siendo la apreciación y establecimiento de éstos una facultad exclusiva y excluyente del juez que conoció del respectivo juicio, y, asimismo, a esta Corte le está vedado efectuar una valoración de la prueba rendida ante el Juzgado del Trabajo, lo que corresponde únicamente a éste, el cual está dotado de plena libertad para ello, con la sola limitación de no contrariar los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

El recurso de nulidad, finalmente, es un arbitrio de derecho estricto que requiere claridad y precisión en su fundamentación lo que resulta necesario toda vez que aquello da y define la competencia del Tribunal superior, el que no puede acogerlo por otros motivos, salvo la situación contemplada en el inciso final del artículo 479 del Código del Trabajo.

**Cuarto:** Que, en consecuencia, el recurso de nulidad es un arbitrio de carácter extraordinario y de derecho estricto y solo procede por las causales que expresamente se prevé en los artículos 477 y 478 del Código del Trabajo.



**Quinto:** Que, sobre el primer motivo de nulidad alegado, resulta necesario tener en cuenta que el artículo 456 del Código del Trabajo establece que: *“El tribunal apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Al hacerlo, el tribunal deberá expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud les asigne valor o las desestime. En general, tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador.”*

Por ello, lo que corresponde es determinar si en su sentencia el tribunal ha vulnerado en forma manifiesta, esto es, de manera evidente y notoria las reglas indicadas en el artículo 456 ya citado.

**Sexto:** Que, de acuerdo a lo expresado, nuestro sistema procesal ha entregado parámetros a los jueces del fondo para la valoración de la prueba rendida en la materia, imponiéndoles la obligación de respetar la coherencia y la razonabilidad que debe conducir tal proceso para resolver en un determinado sentido, los que Couture define como “las reglas del correcto entendimiento humano”.

En consecuencia, en el examen de fundamentación de las sentencias se exige que los tribunales asienten los hechos que sostienen lo decidido y expresen los medios que sustentan esas determinaciones fácticas, porque su motivación legitima la función jurisdiccional y da cabida a la interposición de los recursos legales para activar los mecanismos de control en la aplicación del derecho al caso concreto, de manera que la función del tribunal *ad quem* al conocer del recurso de nulidad por esta causal radica en la revisión del razonamiento que ha seguido el tribunal en el citado proceso.

**Séptimo:** Que, para que esta Corte, en cuanto tribunal de nulidad, se encuentre en condiciones de efectuar un control sobre las reglas de la valoración de la prueba en la fundamentación de la sentencia, resulta indispensable que la parte recurrente precise al momento de formalizarlo, las reglas fundamentales de la lógica, de la ciencia y de la experiencia, que habrían sido incumplidas por el juez de la instancia, límites de ponderación que tradicionalmente se han entendido referidos a las leyes fundamentales



de coherencia y derivación y a los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente.

**Octavo:** Que, en la especie, el recurso indica -en primer término- que la *litis* ha sido resuelta omitiendo ponderar la prueba rendida para acreditar la causal de despido alegada, en atención a los defectos que se atribuye a la carta de despido, por lo que se ha decidido el resultado del juicio sin considerar antecedentes relevantes que demostraban la reorganización experimentada por su parte, lo que es idóneo para comprobar que el despido estaba justificado.

A su turno, denuncia que el sentenciador no expresó las razones jurídicas ni simplemente lógicas para arribar a su conclusión, y que se presentó en la instancia procesal correspondiente el finiquito suscrito, cuyo tenor no da cuenta de reserva alguna sobre los conceptos demandados, pese a lo cual se estimó que ella sí existía, lo que conculca el principio de no contradicción y de razón suficiente.

**Noveno:** Que, sin embargo, semejante exposición de motivos dista de satisfacer el estándar de fundamentación que impone un recurso como el intentado.

En efecto, en lo relativo al primer capítulo sobre la omisión de consideración de prueba respecto de la justificación del despido, éste no sólo no guarda relación con la causal alegada, existiendo una especialmente prevista al efecto, sino que además no ataca la calificación de vaguedad e imprecisión que el juez de la instancia atribuye a los términos de la carta de despido, y que le permite concluir que ésta carece de hechos determinados y precisos, hipótesis expresamente prevista en la ley que permite al sentenciador estimar, desde ya, injustificado el despido.

En consecuencia, este apartado del recurso no puede ser atendido por las deficiencias advertidas en su formulación, que desatiende, por una parte, a su finalidad, y que por la otra, no impugna lo realmente decisorio para los efectos pretendidos, como fue la conclusión referida al incumplimiento del estándar previsto en la ley para la carta de despido y que tiene las consecuencias procesales y probatorias ya anotadas, de lo que se sigue que los presuntos vicios alegados no tienen influencia sustancial en lo dispositivo del fallo.



**Décimo:** Que, a su turno, el segundo capítulo de la misma causal tampoco puede prosperar, porque su fundamentación sólo da cuenta de la disconformidad del recurrente con la decisión adoptada mediante una propuesta argumentativa que únicamente se asila en la pretensión de obtener una valoración funcional a sus intereses de los mecanismos de convicción que menciona, y que la mera referencia a las directrices que han debido guiar el razonamiento judicial y que habrían sido presuntamente conculcadas no subsana.

Lo anterior no resulta admisible tanto porque esta sede no constituye instancia, como porque los medios de prueba aportados han sido adecuada y razonadamente analizados en la sentencia impugnada, y las conclusiones a las que se ha arribado a partir de su estudio y valoración constituyen reflexiones que no solo no han sido correctamente impugnadas, sino que, además, ellas permiten entender conforme a los parámetros que la ley ordena considerar, la convicción del juez de la instancia, la que no desborda los márgenes consagrados en la normativa del ramo, por lo que la causal que se revisa será desechada.

**Undécimo:** Que, sobre el motivo de nulidad invocado en segundo término, esto es, en el previsto en el artículo 477 del Código del Trabajo, sobre infracción de ley, éste tiene como finalidad velar por una correcta aplicación del derecho a los hechos o al caso concreto determinado en la sentencia. En otras palabras, su propósito esencial está en fijar el significado, alcance y sentido de las normas, en función de los hechos tenidos por probados.

Dicha hipótesis resulta procedente en el evento que el fallo aplique incorrectamente el derecho llamado a regir la cuestión que motiva la controversia, lo que puede tener lugar en los casos de contravención formal de la ley -aquéllos en que la sentencia prescinde de la ley o falla en oposición a su texto expreso-; en los de errónea interpretación de la ley -cuando la sentencia da al precepto legal un sentido o alcance distinto a aquel que debió haberle dado si hubiera aplicado correctamente las normas de interpretación; y si existiere una falsa aplicación de la ley -defecto que puede producirse cuando la ley se aplica a un caso no regulado por la norma o la sentencia prescinde de la aplicación de la ley



para los casos en que ella se ha dictado-, siempre que cualquiera de estas hipótesis que se presente influya sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

**Duodécimo:** Que, por lo mismo, esta causal, en su segunda hipótesis, supone la aceptación de los hechos establecidos en la sentencia, por lo que la fundamentación y sustento del recurso por este motivo debe ser coincidente con ese propósito.

En este orden de ideas, constituyen hechos de la causa que el despido del trabajador se produjo por aplicación de la causal del artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo, esto es, por necesidades de la empresa y que tal decisión, resultó injustificada, tal como se afirma en la motivación Octava.

**Décimo tercero:** Que, analizando la impugnación, aparece que la primera disposición citada por el recurso, el artículo 13 de la Ley N° 19.728, establece que: *“Si el contrato terminare por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, el afiliado tendrá derecho a la indemnización por años de servicios (...)”*, agregando el inciso segundo que *“se imputará a esta prestación la parte del saldo de la Cuenta Individual por Cesantía (...)”*.

Por su parte, el artículo 52 de la ley mencionada prescribe que: *“Cuando el trabajador accionare por despido injustificado, indebido o improcedente, en conformidad al artículo 168 del Código del Trabajo, o por despido indirecto, conforme al artículo 171 del mismo Código, podrá disponer del saldo acumulado en su Cuenta Individual por Cesantía, en la forma señalada en el artículo 15, a partir del mes siguiente al de la terminación de los servicios”*.

Y agrega en el inciso 2° que: *“Si el Tribunal acogiere la pretensión del trabajador, deberá ordenar que el empleador pague las prestaciones que correspondan conforme al artículo 13”*.

Luego, el artículo 54 del mismo cuerpo legal dispone que: *“Las prestaciones establecidas en esta ley de cargo de los empleadores a favor de los trabajadores afiliados al Seguro, tendrán la calidad jurídica de indemnizaciones por años de servicio, para todos los efectos legales, y gozarán del privilegio establecido en el N° 8° del artículo 2472 del Código Civil”*.



Finalmente, el artículo 168 del Código del Trabajo consigna, en su inciso penúltimo, que: *“Si el juez estableciere que la aplicación de una o más de las causales de terminación del contrato establecidas en los artículos 159 y 160 no ha sido acreditada, de conformidad a lo dispuesto en este artículo, se entenderá que el término del contrato se ha producido por alguna de las causales señaladas en el artículo 161, en la fecha en que se invocó la causal, y habrá derecho a los incrementos legales que corresponda en conformidad a lo dispuesto en los incisos anteriores”*.

**Décimo cuarto:** Que, del tenor de las disposiciones legales transcritas, se desprende que, para que el descuento opere, es necesario que se haya producido el término de los servicios del trabajador por la causal de necesidades de la empresa.

En efecto, el artículo 13 de la Ley N° 19.728, al usar la expresión *“Si el contrato terminare por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo”*, no alude a la causal eventualmente invocada por el empleador para poner término al contrato de trabajo, sino a que refiere a la que jurídicamente ha tenido lugar.

En consecuencia, la procedencia del descuento que previene el citado artículo requiere no sólo que el contrato de trabajo haya terminado formalmente por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, sino que dicho motivo haya sido validado judicialmente en caso de impugnarse su procedencia o justificación pues, de otro modo, se desvirtúa la intención que se tuvo en vista para la dictación de la ley.

Ahora bien, cuando el despido es declarado injustificado, lo que se determina jurídicamente es que no ha existido la causal invocada para desvincular al trabajador, por lo cual, tratándose de una prerrogativa a favor del empleador, se debe considerar una excepción, lo que conlleva que debe aplicarse restrictivamente, es decir, sólo a los casos en que real y jurídicamente la desvinculación del trabajador se debió a necesidades de la empresa.

Si el juez determina que no se han probado debidamente las necesidades de la empresa para despedir al trabajador y declara que el despido de éste resultó improcedente -como ocurre en la especie- no puede tener lugar la imputación referida en el inciso 2° del artículo 13





precitado, ya que esa deducción está sujeta a la condición de haber operado efectivamente la causal de necesidades de la empresa.

Pensar lo contrario, implicaría que al empleador le bastaría invocar esa causal para que se aplique el descuento, olvidando que esa determinación puede ser objeto de revisión por la justicia, a requerimiento del trabajador, quien acciona motivado por lo que estima una vulneración de sus derechos, los que son irrenunciables.

Este predicamento, por lo demás, se refuerza en el inciso 2° del artículo 52 de la Ley N° 19.728 antes aludido, toda vez que al acogerse la demanda del trabajador, declarando el despido improcedente, dicha disposición establece que el tribunal *“deberá ordenar que el empleador pague las prestaciones que corresponden conforme al artículo 13”*, referencia que debe entenderse hecha al inciso 1° de este último precepto, pues el descuento pretendido obviamente no es el pago de las prestaciones, sino que una disminución de las mismas.

**Décimo quinto:** Que, en tal virtud, al razonar la sentencia en el motivo Noveno en cuanto a la procedencia de la devolución del aporte del empleador a la AFC, no ha incurrido en infracción de ley, pues ha dado correcta aplicación al artículo 13 de la Ley N° 19.728.

**Décimo sexto:** Que, en este mismo orden de ideas, la Corte Suprema con fecha 14 de febrero de 2014, en causa Rol N° 7.847-2023 resolvió: *“Cuarto: Que las sentencias que acompaña para la comparación de la materia de derecho propuesta son las dictadas por esta Corte en los antecedentes N°413-2018, N°19.115-2018, N°9796-2019 y N°122.154-2020, que expresan una tesis jurídica diversa, que, en síntesis, resuelven que una condición necesaria para que opere el descuento, es que el contrato de trabajo haya terminado por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, de modo que si la sentencia declara improcedente el despido, priva de base a la aplicación del inciso segundo del artículo 13 de la Ley N°19.728. En consecuencia, si el término del contrato por necesidades de la empresa fue considerado injustificado, no se satisface la condición, en la medida que el despido no tuvo por fundamento una de las causales que prevé el artículo 13 de la Ley N°19.728.*



*Quinto: Que el fallo recurrido y las reseñadas en el considerando precedente dan cuenta que, en algún momento, existieron distintas interpretaciones respecto de la materia indicada, la que se encuentra unificada desde hace algún tiempo por esta Corte, a partir de la sentencia dictada en la causa Rol N°92.645-2021, criterio ratificado más recientemente en causas Rol N°57.795-2022 y 80.864-2022, entre otras, sosteniéndose sin variación, lo mismo que las sentencias que se acompañan de cotejo, esto es, que una condición sine qua non para que opere el descuento de que se trata, es que el contrato de trabajo haya terminado efectivamente por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, lo que se ve corroborado por su artículo 168, letra a), de manera que si la sentencia declara injustificado el despido priva de base a la aplicación del inciso segundo del artículo 13 de la Ley N°19.728, pues tanto la indemnización por años de servicio como la imputación de la parte del saldo de la cuenta individual por cesantía, constituyen un efecto que emana de la exoneración prevista en el artículo 161 del Código del Trabajo.*

*En consecuencia, si el término del contrato por necesidades de la empresa fue considerado injustificado por el tribunal, simplemente no se satisface la condición, en la medida que el despido no tuvo por fundamento una de las causales que prevé el artículo 13 de la Ley N°19.728”.*

**Décimo séptimo:** Que, conforme lo razonado en los motivos que preceden, el recurso será íntegramente desestimado.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos, 477, 478 letra b), 479, 481 y 482 todos del Código del Trabajo, se **rechaza, sin costas** el recurso de nulidad deducido por la parte demandada en contra de la sentencia de veinte de julio de dos mil veintitrés, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en la causa RIT N°O-1412-2023, la que, en consecuencia, no es nula.

**Regístrese y comuníquese.**

**Redacción de la ministra Graciela Gómez Quitral.**

**N° Laboral-Cobranza-2724-2023.**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VRGWXXSXMP



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VRGWXXSXMP

Pronunciado por la Duodécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Graciela Gomez Q., Veronica Cecilia Sabaj E. y Ministro Suplente Sergio Guillermo Cordova A. Santiago, cinco de julio de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a cinco de julio de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VRGWXXSXMP